

La batalla del teatro en el reinado de Carlos III (I)

ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ

La decadencia del teatro español tuvo como causa primordial la pertinaz campaña que los eclesiásticos, en especial los regulares, dirigieron contra él. Este es un hecho indiscutible, que documentó Cotarelo y Mori¹ y que confirman todos los estudios posteriores. Mal sostenido por los reyes, que después de Felipe IV a lo sumo se limitaron a mantener el teatro cortesano, mal visto también por no pocos regidores municipales, a pesar de que los modestos ingresos del teatro contribuían a incrementar el presupuesto benéfico de algunas ciudades, las representaciones teatrales decayeron en número y calidad, y a la muerte de Calderón (1680) su decadencia literaria y social era tan notoria que con él

¹ En su *Bibliografía de las controversias sobre la licitud del Teatro en España* (Madrid, Tip. Revista Archivos, Bibliotecas y Museos, 1904) señala como causa principalísima de su decadencia «esta guerra sin cuartel que se le hizo en nombre de la moral en el púlpito, en el confesonario, en las tertulias, en libros, folletos, acuerdos de ayuntamientos, censuras episcopales y añagazas de todo género empleadas por los poderosos para tener casi siempre cerrados los edificios».

puede decirse que termina el Gran Siglo escénico en España. Solamente en Madrid y en algunas ciudades comerciales como Barcelona y Cádiz mantuvo el teatro un nivel de cierta dignidad en el siglo XVIII. En Andalucía, salvo Cádiz, su ruina fue casi total; en Sevilla el misionero jesuita Tirso González consiguió que en 1679 fuera cerrado el último corral de comedias, y la segunda ciudad de España siguió sin representaciones teatrales hasta la accidentada y efímera restauración de Olavide, un siglo más tarde. En 1694 desaparecieron las comedias de Córdoba por las activas gestiones del beato Francisco Posadas, dominico. En Granada el teatro pasó por alternativas diversas. Después de la restauración de las actividades teatrales en Andalucía por el impulso de los ministros de Carlos III (fundamentalmente Aranda y Rodríguez Campanas), Andalucía volvió a quedar casi totalmente privada de espectáculos a fines del siglo XVIII, y gran parte de la responsabilidad de este hecho es imputable al beato Diego de Cádiz, el famoso misionero capuchino. En el resto de España quizás no fue tan violenta la ofensiva eclesiástica contra el teatro, pero puede mencionarse la campaña llevada a cabo en Castilla y en el norte por el P. Calatayud, S. J.; la que efectuaron los jesuitas de Guipúzcoa, incluyendo en sus censuras a la Sociedad Vascongada por su apoyo al arte escénico²; el derribo de bastantes corrales de comedias, las excomuniones del obispo de Sigüenza³ y otros muchos incidentes del mismo género.

En resumen, se trataba de un aspecto más de aquel cambio de rumbo que había conducido a la Iglesia española a olvidar los grandes temas doctrinales en los que había brillado la ciencia de los teólogos del siglo XVI, para confinarse en un moralismo exagerado y, a la larga, contraproducente. Peligroso, además, en un siglo como el XVIII en el que el absolutismo regio llegó al ápice, porque siendo el teatro una actividad sujeta primordialmente a la autoridad civil, la intromisión eclesiástica tenía que dar lugar a choques jurisdiccionales que pondrían a la Iglesia en una posición falsa, circunstancia que no dejaron de aprovechar los ministros *ilustrados* para sus propios fines.

Hay aquí, pues, una serie de cuestiones que interesan a historiadores, sociólogos, teólogos y críticos literarios y que, sin embargo, ha me-

² M. de la Pinta Llorente, *Los caballeritos de Azcoitia* (Madrid, 1973), p. 27.

³ La única noticia que tenemos de este asunto se contiene en dos consultas del Consejo de Castilla del año 1703. El obispo declaró incursos en censuras no sólo a los comediantes sino a los asistentes a las funciones. En otra ocasión puso preso en la cárcel episcopal a un mozo que con un tambor recorría la ciudad anunciando la función. Se entabló recurso de fuerza ante la chancillería de Valladolid (A. H. N., Consejos, 7.118).

recido hasta ahora muy poca atención. Lo que suele llamarse *la batalla del teatro* se refiere a los aspectos estéticos, a la lucha entre los partidarios del antiguo teatro español y los neoclásicos apoyados por los gobernantes. Pero hubo otra batalla de índole política y con indudable trasfondo anticlerical, a la que aquí vamos a referirnos. Fue la conducida por Aranda y Campomanes durante varios años en defensa del teatro en general, como diversión loable y necesaria, escuela de virtudes ciudadanas que debía depender sólo de la autoridad civil, actitud que tenía que conducir a un choque con obispos y regulares. Choque previsto y quizás buscado por aquellos dos hombres, cuyo talante anticlerical se hallaba exacerbado a raíz del Motín de Esquilache (1766) y contaba con el apoyo del monarca, convencido de la participación de los jesuitas y de otros elementos de la Iglesia en unos sucesos que habían puesto en peligro su autoridad y su corona.

De este aspecto apenas se ha dicho nada. Un artículo de González Palencia⁴ relató el choque del Gobierno con el vicario eclesiástico de Madrid por haber éste prohibido la representación de *La Serva Padrona* en su versión española sin advertir que era sólo un incidente, sin abarcar el problema en su totalidad. Durante algunos años, el binomio Aranda—Campomanes tuvo todo el apoyo real, no porque Carlos III estuviera interesado en el teatro, sino porque sus ministros lo convinieron de que su autoridad estaba en juego. Aranda impulsó los bailes de máscaras en Madrid y otras ciudades. Campomanes excitó a restablecer el teatro en las ciudades donde había sido suprimido, dando lugar a una serie de incidentes que motivaron otros tantos expedientes en el Consejo de Castilla, del que era fiscal. En espera de la obra fundamental que el asunto requiere, voy a dar noticia de algunos de estos incidentes, prescindiendo de los ocurridos en ciudades andaluzas, algunos ya conocidos⁵, en aras de la brevedad que imponen las dimensiones del presente artículo.

En 1768 el Consejo abría un expediente con motivo del pedimento elevado por una compañía de cómicos que actuaba en Segovia al intendente y corregidor de dicha ciudad. En él expresaban que estaban representando con honestidad y quietud desde el 11 de abril hasta que el 13 de mayo empezaron dos padres capuchinos a predicar una misión,

⁴ «Ideas de Campomanes acerca del teatro», *Boletín de la Real Academia Española*, tomo 18, 1931, pp. 553-570.

⁵ Especial mención merece, dentro de una bibliografía relativamente copiosa, la obra de Francisco Aguilar Piñal, *Sevilla y el teatro en el siglo XVIII* (Oviedo, Cátedra Feijoo, 1974). Abundantes datos también contiene el *Olavide* de Defour-neaux.

en la que habían dicho que las personas que asisten a la comedia cometen cuatro pecados mortales, atemorizando a la gente para que no asista, siendo así que en la catedral, donde se celebra la misión, no cabe la gente, mientras la que va al teatro es tan poca que los actores no se podían mantener.

El corregidor intentó remediar el escándalo acudiendo al obispo para que reprendiese a los misioneros. Eran éstos los padres fray Eugenio de Siete Iglesias y fray Isidoro de Fermoselle, ambos del convento de Toro. Algunas de las expresiones de que usaban en sus prédicas tenían cierto sabor de oposición política, «siendo de reparo la frecuencia con que apoyan su doctrina con autoridades y citas de los expulsos regulares». También chocó la mención de Enrique VIII de Inglaterra y su persecución a los frailes. En vista del cariz que tomaban las cosas, el corregidor (D. Francisco de Azcue) le dio cuenta de lo actuado y de que había puesto presos a cuatro individuos por arrancar los carteles en que se anunciaban las comedias.

Inmediatamente interviene Campomanes; ordena se pidan informes al lectoral, al penitenciario y a varios prominentes regulares, los cuales reconocen que en los primeros sermones los misioneros se habían excedido, pero después habían suavizado sus dictámenes y habían salvado la buena intención del Gobierno al autorizar las comedias. El día 25 el corregidor escribía a Campomanes que, tras mucho trabajar con el P. Fermoselle, había obtenido promesa de que retractaría sus palabras; envió al sermón tres notarios para que dieran fe de sus palabras que, a juicio del corregidor, habían sido suficientes.

Pero Campomanes no era hombre para dejarse convencer fácilmente; en su dictamen de 30 de mayo confiere especial gravedad a la alusión a Enrique VIII, que expulsó a los monjes (como Carlos III había expulsado a los jesuitas), «por más que la hayan disculpado suponiendo estar el sermón compuesto antes de la expulsión de los regulares de la Compañía». Otro detalle gravísimo era para él que la declamación de los misioneros contra los bailes de máscaras pareciera inspirada en los sermones del jesuita P. Calatayud, «cuyos sequaces se manifiestan estos misioneros a pesar de la decencia que se observa en esta diversión en todo el Reino». En su opinión, si se tolerasen tales declamaciones no sólo se perturbarían las conciencias sino que se autorizaría la *insubrepción* (sic) contra el Gobierno, culpable del supuesto pecado de permitir unas diversiones tan necesarias en las ciudades populosas. Proponía que se recogieran los originales de los sermones para su examen.

Entre tanto, en Segovia las cosas en vez de arreglarse empeoraban,

al menos según el criterio suspicaz del fiscal y sus adláteres. Los misioneros, envalentonados con el apoyo del obispo, habían vuelto a vociferar contra cómicos y comedias, habían hecho una procesión general que el corregidor procuró no se acercase al patio de comedias para evitar un posible desaguizado, y negaban que ellos se hubiesen retractado de sus doctrinas. El ambiente creado era tan espeso que los cómicos eran mal mirados e insultados. Todo esto llevaba agua al molino de Campomanes. El vicario provincial de los Capuchinos, temiendo las derivaciones que pudieran tener el asunto, disculpa el «nimio e indiscreto celo» de sus subordinados y les ordena que se vuelvan *via recta* a su convento de Toro, con prohibición de predicar por el camino. El obispo también llevó su reprensión. Cierra el expediente un largo escrito de fray Isidoro, redactado meses después (febrero de 1769) en el que trata de justificarse y hace protestas de subordinación ⁶.

Otro de los muchos episodios a que dio lugar el interés del equipo ilustrado por restablecer las representaciones teatrales y la resistencia de los enemigos de las mismas, y uno de los más curiosos, tuvo lugar en Cuenca. Era entonces obispo de esta ciudad el célebre D. Isidro Carvajal y Lancaster que el 15 de abril de 1766, a pocos días de distancia del Motín de Esquilache, dirigió al confesor real una carta lastimera en la que suponía perseguida a la Iglesia de España, carta que le valió una reprensión ante el Consejo pleno. Poco antes de este desenlace, el 28 de agosto de 1767, dirigía otra carta a Carlos III, también de tono apocalíptico; ahora el mortal peligro para la Iglesia provenía de la presencia de unos cómicos. Recordaba en ella que:

Quando el augusto padre de V. M. [Felipe V] tenía su corte en Sevilla ⁷, era obispo de Cuenca mi tío el duque de Abrantes; entró en ella una farsa y fueron tales los escándalos que inundaron la ciudad y la miseria en que la puso la desordenada afición de sus vecinos que vendían quanto tenían para ver las comedias, que representado todo a S. M. por mi tío mandó saliese la compañía y prohibió para siempre la entrada de otra. Esta Real Orden se intentó frustrar en tiempo de mi antecesor, y el señor Fernando VI se sirvió mandar derribar el patio para quitar toda ocasión de contravenir a los reales decretos.

Estas dos victorias tan gloriosas logró este obispado en el tiempo de los dos citados prelados, pero todo lo ha perdido en el presente con las más funestas consecuencias: la primera, con los gastos para formar un patio interino en que están representando más de un mes sin saber quando tendrá fin. La segunda, en los que provienen para levantar el patio derribado. La tercera, en el aumento que toma la suma pobreza de los vecinos, que viviendo los más de

⁶ A. H. N. Consejos, 454-4, 119 folios. Incluye el texto de los sermones.

⁷ Ello tuvo lugar en el quinquenio 1729-1733.

limosna la gastan aunque no coman en ver las comedias. Y lo que excede a todo, la perdición general de las almas...

D. Isidro se quejaba del desprecio a su autoridad que suponía tal estado de cosas, pues ya no sólo eran seglares los que asistían a las comedias, sino algunos curas, e incluso prebendados de la catedral, «atropellando no sólo mis avisos impresos en mi pastoral última sino todas las disposiciones de la Iglesia».

El expediente pasó a Campomanes, ya prevenido contra el obispo de Cuenca por la carta antes mencionada. Le puso al fiscal la cosa más fácil el descubrimiento en el convento de carmelitas de dicha ciudad de un cartapacio conteniendo unas cuartetas satíricas en las que se atacaba al Gobierno e incluso a la majestad real a propósito de la permisión de las comedias. En el expediente figuran algunas de estas coplas desvergonzadas, de las que daré sólo una muestra:

Acudid a las comedias
que es consentimiento real,
azeros aficionados
como lo es Su Majestad.
Estríbillo:
Comedianta bonita y madama,
de las tablas caliente a la cama.

El Rey lo manda
Esto es bueno,
y si fornicar mandara,
también dixeras lo mesmo.
Comedianta...

Quítese a Dios el culto
en parte de Religion
y entren pues los comediantes
que traen real permisión.
Comedianta...

Los cómicos en los pueblos,
y fuera de ellos los frailes.
Así lo manda el Monarca
porque es mejor tabla y bailes.
Comedianta...

Auméntense los teatros,
quítense iglesias de España,
y pues que lo manda el Rey
todo lo demás es zambra.

Campomanes se mostró escandalizado. Las coplas, dice, prueban que dentro del claustro pueden darse los delitos más atroces. El odio al Gobierno que respiran «no puede menos de tener raíces en lo que se oye en las casas episcopales». Las coplas debían ser quemadas en la plaza principal por el verdugo, y el general de los carmelitas había de imponer a su autor el escarmiento más ejemplar «para que un monstruo de

su especie no contamine el rebaño y sepan los regulares que no quedarán impunes sus demasías».

En cuanto al asunto del teatro, ya se seguía expediente a instancias del corregidor, D. Juan Núñez del Nero. Según su informe, en el restablecimiento de las comedias se habían seguido las reales instrucciones de 1753 y 1763, así como las dictadas por el corregidor de Madrid en su calidad de Juez Protector General de Teatros, y en su virtud, para asegurar la prevención de todo escándalo, había dispuesto que las representaciones comenzaran en verano a las cuatro y media para concluir antes de anochecer «y evitar los desórdenes que facilita la oscuridad». No se permitiría la presencia de hombres parados y embozados a la puerta del patio de comedias. Se prohibía también fumar, la entrada de hombres en la *cazuela* o apartamento destinado a las mujeres, etc. En total, la ordenanza del corregidor constaba de catorce artículos. El mismo funcionario certificaba el 2 de octubre de 1767 que las representaciones se habían hecho con tranquilidad y compostura y que si los cómicos han frecuentado algunas casas particulares y recibido agasajos había sido como consecuencia de su actuación en ellas, portándose en todo momento honestamente.

Sobre estos fundamentos construyó Campomanes su dictamen fiscal. Censuraba la actuación del obispo Carvajal, censura ampliable a su tío, que ordenó el derribo del patio de comedias, que no era de la Mitra, sino de los propios de Cuenca, que ahora necesitan hacer un desembolso para reconstruirlo. Sobre el fondo de la cuestión, reincide en sus argumentos en pro del teatro y sus virtudes educativas. «Son continuas las quejas de que las gentes distinguidas se vienen a vivir a la Corte, y pocos advierten que esto dimana en mucha parte del mal gobierno de las ciudades; de haber el celo indiscreto exterminado las diversiones públicas⁸, y de hacerse poco sufrible la prepotencia que algunos preladados quieren tomar en los pueblos donde residen, mezclándose en los negocios del gobierno político, que ni es de su incumbencia ni entienden, abandonando tal vez la tarea de formar un clero digno». Censura a su obispo por no tener seminario. Dicen que no le gustan las comedias. «Hace muy bien en no frecuentarlas. Lo mismo le sucede al Fiscal, y con todo las cree necesarias y juzga que el gusto particular no debe prevalecer al común sentir.» No le merecen más indulgencia otros alegatos del obispo. El gasto que va a hacer la ciudad en construir el patio de co-

⁸ Lugar común de los ilustrados. Véase en la *Respuesta a los literatos de Ecija* la pintura que hace Forner de los males que acarreaba la falta de diversiones honestas y el muy conocido tratadito de Jovellanos (*Memoria sobre las diversiones*).

medias es imputable a la Mitra que lo hizo derribar. Decir que la asistencia al teatro empobrecerá a los habitantes es ridículo habiendo tasado el corregidor la entrada a cuatro cuartos. Además, ninguna de estas cosas es de la incumbencia del obispo, «a quien se le ha metido en la cabeza regir desde su alcoba la Monarquía».

El expediente durmió sin que el rey tomara una resolución. Volvió a reactivarse años después, en 1774, cuando el clima ya había cambiado en la Corte. En carta de 18 de febrero de dicho año el obispo de Cuenca volvía a la carga: relataba que en 1768 el municipio había pedido licencia para labrar un coliseo que costaría 69.576 reales. No se había llevado a efecto, pero ahora había obtenido permiso para cortar sesenta mil pinos y parte de la cantidad que se obtuviera quería aplicarla a dicha obra, lo que reputaba absurdo por la escasa población y mucha pobreza de Cuenca, «donde no pasarán de ocho casas (no contando las de eclesiásticos) las que puedan gastar en lo superfluo veinte reales, y muy perjudicial, porque sobre la ociosidad de la gente pobre habían de ir a la comedia los mismos que acuden a las puertas del obispado por la media libra de pan que diariamente les da». Refería el prelado que para remediar el ocio y la pobreza había gestionado que se enviasen a Cuenca labores de la Real Fábrica de Guadalajara y acababa expresando la necesidad de crear un hospicio y un cuartel de milicias. En ello se emplearían mejor los fondos de propios que en edificar un teatro.

En 10 de abril de 1774 Campomanes replicaba a los argumentos del obispo: los jornaleros no van a las comedias. La ociosidad de Cuenca nace de otros principios: de estar aniquiladas sus fábricas, de las limosnas que se dan a las puertas del obispado y del cabildo a los vagos y mendigos; de la rivalidad del cabildo eclesiástico con el secular, causa de que no se haya llevado a efecto la instalación de un hospicio cuyas ordenanzas, redactadas por el corregidor D. José Moñino, había aprobado el Consejo en 1766, «y no se ha plantificado por el vanísimo empeño de querer preferir los cánonicos a los regidores». De esta situación nace que la nobleza, carente de honestas diversiones y avasallada por los eclesiásticos, vaya desamparando la ciudad.

Campomanes, que no encajaba la derrota, reconocía que la obra del coliseo había sido paralizada por orden real y que la consulta de 1768 no había sido resuelta, pero lo atribuía a olvido y proponía que se hiciera recordación a S. M. No debió de hacerse. En todo caso, en el expediente⁹ lo único posterior a 1774 son unos papeles de 1777 referen-

⁹ A. H. N., Consejos, 677-12.

tes a una reclamación de María Martínez, *autora*¹⁰ de comedias, que había llegado a Cuenca llamada por el Ayuntamiento, había gastado algún dinero en reparar el edificio, pero luego se le notificó que el Consejo había prohibido las representaciones. Campomanes dictaminó que, en efecto, tenía motivos para reclamar, pero no al municipio. ¿A quién entonces? Lo más probable es que la señora Martínez perdiera su tiempo y su dinero.

En Valladolid la postura de las autoridades respecto al teatro era diversa¹¹; en realidad, sólo el municipio se mostraba francamente favorable por motivos económicos: como en otras ciudades españolas, los beneficios de la explotación del teatro ayudaban a sostener la Casa de la Misericordia; las autoridades universitarias consiguieron que las representaciones se interrumpieran mientras durasen los cursos para que los alumnos no se distrajesen del estudio; los prelados se mostraron ya indiferentes, ya hostiles. En 1766 Petronio Seti, *autor* de óperas italianas, pidió permiso para representar y el obispo se lo negó, basándose en las reales órdenes de 13 de mayo de 1757 y 14 de julio de 1764 que prohibían las representaciones en Valladolid. Intervino el conde de Aranda, entonces presidente del Consejo, hizo ver la usurpación de funciones que cometía el obispo y obtuvo la anulación de las prohibiciones antes citadas. Otro incidente del que no tengo detalles motivó la extensa consulta de 19 de noviembre de 1770 en la que se reitera la exclusiva jurisdicción de la potestad civil en materia de espectáculos. «Todo el daño que hoy experimentan las compañías nace del artículo 18 del reglamento de 1753, repetido en 8 de abril de 1763, executado por orden del obispo de Cartagena siendo gobernador del Consejo dando intervención al vicario eclesiástico en estas representaciones». A esta juiciosa observación sigue otra desafortadamente regalista que pinta la atmósfera de aquellos años: «Los prelados no deben permitir se declame contra las comedias porque eso es declamar contra el Gobierno, con cuya autoridad se ejecutan». Es inconfundible aquí el estilo, la mentalidad archiabsolutista de Campomanes, y los siguientes párrafos de la consulta también están dentro de la misma línea de pensamiento: El Gobierno debe formar buenos músicos y declamadores y convertir el teatro en una escuela de buenas costumbres, y también del buen gusto literario, evitando las faltas contra la verosimilitud y las reglas. Puede sospecharse una alusión a la priveranza de que gozó Farinelli en el párra-

¹⁰ En el sentido de empresaria.

¹¹ Celso Almuíña, *Teatro y cultura en el Valladolid de la Ilustración*, Valladolid, Ayuntamiento, 1974.

fo referente a la necesidad de crear una escuela nacional de ópera, pues de su falta «resulta establecerse en Barcelona, Cádiz y los Sitios Reales compañías italianas que introducen costumbres extranjeras [...] Tales cómicos extranjeros con el tiempo adquieren introducciones que les hacen tomar demasiada mano en los negocios públicos»¹².

Este expediente se unió al formado en 1766 con motivo de la prohibición por el vicario de Madrid de *La Criada Señora*. Escogemos del voluminoso expediente esta otra *perla* que declara sin rebozo el fruto, más político que estético, que aquellos gobernantes pensaban sacar de las representaciones escénicas: «Las comedias, tragedias y dramas son utilísimos, pues el Gobierno, por boca de los actores influye en los espectadores aquellas enseñanzas con capa de diversión». Como se ve, el afán por controlar los medios de comunicación no es de ahora. Pero la capacidad de difusión del teatro español en el siglo XVIII era escasa, y además, ¿dónde estaban los autores y actores que se hicieran portavoces de las ideas de los ministros de Carlos III?

La destitución del conde de Aranda en 1773 de la Presidencia de Castilla fue el signo de un cambio de rumbo en la gobernación del Estado. Desde 1766 había vivido en pie de guerra contra los supuestos promotores de los alborotos, y Campomanes se había aprovechado del estado de ánimo del monarca para satisfacer sus fobias, en especial contra todo lo que, de cerca o de lejos, oliera a jesuitismo. Había conducido la «guerra del teatro» procurando darle un tinte político, haciendo de ella un símbolo de la supremacía del poder real, o sea, del poder civil. Pero esta campaña carecía de base. Los enemigos del teatro quizás no eran muchos, pero sí decididos e influyentes en la Iglesia y en los municipios. Los partidarios del teatro no eran muchos ni entusiastas. En todo caso, lo decisivo era la voluntad real. Ahora bien, Carlos III nunca gustó del teatro ni de la ópera¹³. Las prédicas de Campomanes sobre su sentido político, educativo y cultural debían de sonar a chino a un monarca que ha sido indudablemente supervalorado, a un hombre mediocre, desinteresado de los libros y de las artes, a quien sólo la caza procuraba un lenitivo al aburrimiento. Mantenía un teatro de Corte por tradición, por prestigio, no porque gustara de las representaciones. Además, pasada la impresión de temor y desconfianza que en él produjeron los alborotos y que ciertos ministros se esforzaron por

¹² A. G. S., Gracia y Justicia, 993.

¹³ De su desinterés por la música hay una observación incidental de su biógrafo el conde de Fernán Núñez (*Vida...*, I, p. 53) y de su aversión al teatro se hace eco E. Gigas, «Un voyageur allemand-danois en Espagne», capítulo I, *Revue Hispanique*, tomo 69, abril, 1927.

mantener, empezaba a pensar que Aranda, con sus maneras despóticas y su aire volteriano, había llevado las cosas demasiado lejos. Nada partidario de las soluciones drásticas, Carlos III lo licenció, disimulando su desgracia con el cargo de embajador en París, y lo sustituyó por el inocuo Ventura Figueroa, el travieso y expeditivo gallego que había arreglado en Roma la cuestión del Concordato y que, carente de programa, sólo se proponía plegarse a la voluntad real y durar en el cargo. A Ventura Figueroa le tenía tan sin cuidado como al rey el valor educativo del teatro. Y como había que reconquistar la confianza de las clases dirigentes, sobre todo del Clero, que se manifestaba agraviado, se sacrificarían los intereses teatrales siempre que surgieran conflictos con el poderoso estamento. Por su parte, Campomanes, que no tenía vocación de mártir de una idea, percibió el cambio de viento y arrió velas, porque él también quería durar. Y lo consiguió, pues sólo dejó la Fiscalía del Consejo por el cargo de gobernador del mismo, que ostentó desde 1783, y en el que siguió una política de conservadurismo poco acorde con sus precedentes actuaciones.

Los bailes de máscaras se prohibieron en octubre de 1773, es decir, casi coincidiendo con el cese de su introductor. Por entonces libró Campomanes las últimas batallas o escaramuzas de su guerra particular. El teatro de Burgos había sido objeto de los ataques del dominico fray Antonio Garcés, que predicó en aquella ciudad en 1752. Tres años después se decretó su demolición por el Ayuntamiento, presidido por el corregidor, marqués de Espinardo, a quien se multó en la residencia por haber ordenado dicha demolición sin licencia del Consejo¹⁴. Teófilo López Mata dice que ya no volvió a haber representaciones en Burgos hasta 1812¹⁵, pero documentos contenidos en un expediente del A. H. N.¹⁶ demuestran que se dieron funciones de ópera en mayo de 1773 por una compañía que dirigía el italiano Alfonso Molini y que antes había actuado en Bilbao. Tuvieron los actores la precaución de visitar antes al arzobispo, quien los acogió bien, les dijo que sabía que la ópera es un espectáculo distinto de la comedia y que por su afición a la música asistiría al espectáculo si no se lo vedase la dignidad de que estaba revestido.

¹⁴ El corregidor escribía en 1771 que «no podía menos de admirar que se desentendan los regidores de haber derribado sin facultad un pulido teatro público, de cuyos materiales se aprovecharon los comisionados en la fábrica de un corral, construido en el mismo sitio para resguardo del ganado de la obligación». (Cit. en el *Correo de Nifo*, vid. A. H. N., Consejos, legajo 523, exp. 14).

¹⁵ «Estampas históricas burgalesas del siglo XIX», *Bol. de la Institución Fernán González*, núm. 172, 1969, pp. 79-80.

¹⁶ Consejos, 1.183-43.

Sin embargo, la campaña contra la ópera comenzó inmediatamente, llegando a negarse la absolución a algunos por haber asistido. El propio arzobispo se sumó a ella, quizás porque le convencieron de los peligros morales que encerraban aquellas representaciones. El 20 de agosto el conde de Aranda, de paso en Burgos, asistió a la ópera, pero dos días después el arzobispo predicó en la catedral con el resultado de que desde entonces dejaron de asistir los eclesiásticos y muchos seglares, aunque también «se habló entre la oficialidad y la nobleza con sentimiento de una novedad que no se hermana con la razón». En el expediente se encuentran los textos de algunos sermones que muestran el tono exaltado de la campaña, y una carta del carmelita fray José de San Eliseo fechada en 24 de diciembre y dirigida al confesor real en la cual pueden leerse estos párrafos:

El arzobispo siempre me insta que predique con más frecuencia [contra el teatro]. En el presente año vinieron a esta ciudad unos italianos con unas farsas que intitulaban óperas. Confieso que jamás las he visto. Comedias sí, estando estudiando en Valladolid, y me pesa de haberlas visto. Me informé de sujetos de virtud y juicio de la forma y circunstancias del theatro y formé dictamen que excepto algunas representaciones de los gentiles éstas eran más indecentes y más deshonestas que las gentílicas; tenían un gran golpe de música, encantando los oídos como sirenas, y salían las italianas a bailar. ¿Pero cómo? Con el mayor adorno o la mayor disolución. *Averte faciem tuam a muliere compta*, nos dice el Espíritu Santo. Salían con mitras brillantes, sin basquiñas, con unos tafetanes hasta cerca de las rodillas, y al dar la vuelta me aseguran los que incautos lo vieron, hasta la cintura, cubiertas, sí, con telas delicadas, que como advierten graves teólogos es más provocativo a la lascivia.

El pueblo de donde vinieron, que era Bilbao, me aseguraron muchos que había quedado perdido, y éste se iba haciendo cada día peor, pues aunque hay mucha piedad, Burgos en lo moral se iba perdiendo con las óperas; estaban como encantados con ellas, y hasta muchos eclesiásticos asistían con escándalo de las personas piadosas...

Para remediar tal escándalo predicó un sermón que uno de los *operantes* delató al Intendente. Este visitó nuestro convento y el de San Pablo; los acusó de haber hablado mal del ministerio, cosa que negaron los frailes. La carta termina con chismes contra el Intendente, que tenía un garito en su casa, y contra su mujer, que aparecía en público con los pechos descubiertos¹⁷.

El confesor real, padre Eleta, tan poco amigo de farsas teatrales como su regio penitente, hizo saber al presidente Ventura Figueroa:

¹⁷ Este esbozo del *top less* era una moda francesa introducida en España y visible en muchos retratos de la época.

Enterado el Rey de la carta inclusa me manda remitirla a V. I. para que tome noticias de lo que hubiese en esto, y de la licencia con que han sido admitidos en Burgos estos farsantes y aplique la providencia correspondiente para evitar excesos, en el concepto de que S. M. considera que semejantes representaciones sólo se pueden sostener para diversión pública en lugares de mucha población y riqueza, y pueden ser un gravamen intolerable en pueblos de menos gentes y facultades, dexando a la prudencia de V. I estas regulaciones y las precauciones conducentes a evitar escándalos.

Ventura Figueroa trasladó, a su vez, las directrices indicadas al corregidor:

La sabia penetración de S. M. advirtió que debió escusarse la admisión de la compañía en ese pueblo, no acostumbrado a semejantes diversiones [...] Quiere S. M. se repare con prudencia lo que se executó sin la debida reflexión, previniendo a V. S. que al instante que termine el próximo carnaval despache la referida compañía [que, en realidad, hacía meses que había salido de Burgos] y vigile que en los pocos días que restan ejerciten su habilidad con la mayor modestia y compostura, previniendo al empresario que sólo en los pueblos grandes, acostumbrados a estas diversiones, corregidas y reducidas a la debida modestia, se permiten sus funciones.

Pero las instrucciones reales tenían una segunda parte: «Una vez admitida por el Magistrado [o sea, por el Intendente] la compañía no debió permitirse el abuso de declamar contra ella desde el púlpito; en caso de notar alguna cosa digna de corrección correspondía avisarlo al corregidor reservadamente o dar quenta al Consejo». Escoció este palmetazo al arzobispo, que replicó en larguísima carta de 13 folios asegurando que no hubo nada reprehensible en los sermones; sólo celo por la Religión, gracias a lo cual las representaciones cesaron por falta de público. La obligación de los eclesiásticos es predicar y advertir al pueblo, «pero si el Consejo, mejor iluminado, encontrase inconvenientes y nos mandase callar, ahogaremos nuestra voz, diciendo antes que el Consejo lo manda así». Las providencias del Gobierno, añadía, siempre son *autorizadas*, y las declamaciones desde el púlpito *perturbativas*. En Francia hay multitud de bailes y representaciones teatrales; sin embargo, sus tribunales no se han manifestado desabridos con los predicadores que los reprueban. En Madrid mismo se ha declamado contra los bailes de máscaras sin que se tomase ninguna providencia, pues una cosa es autorizar para evitar mayores males una diversión y otra aprobarla.

No parece que este negocio tuviera otras derivaciones. Tampoco fue objeto de resolución final el expediente abierto por el Consejo en 1774 a instancias de la Audiencia de Asturias con motivo de unos sermones contra las comedias predicados por D. Rafael Menéndez, canónigo magistral de Oviedo. En mayo de aquel año Manuela Antonia

Iglesias, mujer de Manuel Lucía, ausente, *autor* de la compañía que estaba representado en la capital del Principado, se dirigió a la Audiencia manifestando que con licencia real y municipal estaban actuando en Oviedo desde 22 días antes sin dar el menor escándalo, pero el susodicho magistral había tratado públicamente de réprobos no sólo a los comediantes sino a los que asistían a las funciones, por lo que la concurrencia había disminuido hasta cifras cortísimas, «y apenas podemos salir a la calle, porque los menos instruidos nos tratan con el mayor baldón.»

A consecuencia de esta denuncia los magistrados interrogaron a diversas personas: Antonio Fernández de la Llana declaró que aunque al principio las actrices lucían grandes escotes luego, por providencia municipal, se había puesto remedio. Don José Pérez Balseras, procurador, testificó que la compañía no había dado ningún motivo de queja y que el magistral, en sus sermones, no sólo incriminó a los asistentes a las comedias sino a las autoridades que las permitían. Don Francisco Fernández agregó que el pueblo hablaba mal de los cómicos, y el conde de Peñalba dijo que al pasar las comediantas una aldeana exclamó: «¡No se cayera sobre vosotras una teja!» Otros testigos depusieron de hechos parecidos.

Una nueva instancia de María Antonia puntualizaba que la compañía había llegado de El Ferrol, que habían tenido treinta mil reales de gastos y que la culpa de las pérdidas la tenía el magistral, que había llegado a decir desde el púlpito que eran indignos de sepultura eclesiástica. La Audiencia decide ampliar la información y oye más testigos, que corroboran las expresiones usadas por el magistral en sus sermones. Luego, la Audiencia ofició al ordinario de la diócesis para que el magistral rectificara, pero el provisor respondió que el primer sermón había sido censurado y aprobado por varias comunidades religiosas.

La situación creada debía de ser muy violenta para los magistrados, que conocían el ambiente de Vetusta y quizás participaban de él. Por eso optaron por inhibirse, acudiendo al expediente de dar cuenta a Madrid de lo que ocurría, y de la dificultad que hallaban para enfrentarse con el magistral, hombre que gozaba de mucho crédito en la ciudad. Por su parte, el obispo dio su versión de los hechos en carta a Ventura Figueroa (5 de julio de 1774). Tras el primer sermón, predicado el día de la Trinidad, los cómicos se habían quejado a la Audiencia y ésta había exigido una rectificación, pero el magistral obtuvo parecer favorable de las tres comunidades de Oviedo (benedictinos, dominicos y franciscanos). Por ello, el provisor no intimó al magistral que se desdijese, pero sí que no volviera a tocar el tema, cosa que no cumplió, volviendo a él en el sermón de la octava del Corpus. A pesar de su desobe-

diencia, decía que era hombre ejemplarísimo. En cuanto a las comedias, no se representan con las cautelas que ordenó el real decreto de 19 de septiembre de 1725 y que renovó Fernando VI. Aludía el obispo a la inmodestia en el vestir de las farsantas, a la distracción de los alumnos, que abandonaban las aulas universitarias por el patio de comedias, y terminaba pidiendo que los cómicos se marcharan de Oviedo.

El 18 de julio Campomanes informaba apelando a sus habituales argumentos. El magistral se había excedido. «Los predicadores no pueden en materias opinables y que se practican con aprobación de las autoridades declamar contra sus providencias desacreditándolas como pecaminosas y excitando a los pueblos a que las desobedezcan [...] No puede ser lícito en la Corte lo que no es permitido en Oviedo, porque la ley evangélica y la moral cristiana son la mismas en todas partes. Tampoco corresponde al magistral determinar si en Oviedo son o no convenientes las comedias, porque éste es un asunto de policía muy distante del ministerio de la predicación [...]». Después, nada. Silencio administrativo. Diez años más tarde, en 7 de enero de 1784, la Sala de Gobierno decreta: «Dese quenta». Nuevo silencio. Por fin, en 6 de octubre de 1788, dos meses antes de la muerte del tercer Carlos, el carpetazo definitivo: «Sobreséase por ahora este expediente y vuélvase al oficio»¹⁸.

Menudean en estos años finales del reinado de Carlos III las peticiones, no sólo de eclesiásticos sino de ayuntamientos y particulares para que no se permitan comedias. En Aranda de Duero un tal don Pedro Ponce de León se quejaba en febrero de 1783 de que una farsa admitida en la población desde antes de Navidad «aún permanece, sin esperanzas de que se retire, estando tan bien hallada y protegida de los desocupados». Actuaban en el patio del colegio, distrayendo a la juventud del estudio y las buenas costumbres. «Han llenado sus paredes de epitafios jocosos, deshonestos, cuya expresión oculto [...] Este pueblo vive de labranza, y a todos, como ignorantes, distrae de su destino la diversión». Se pidió informe al corregidor. En efecto, el Ayuntamiento había destinado a las representaciones el patio del colegio, pero a horas distintas de las clases, por lo que no embarazan la enseñanza. Los epitafios [sic] indecentes no están consentidos. En noviembre de aquel año el Fiscal informaba que no había que tomar providencias, puesto que la compañía ya se había retirado de Aranda y no se habían producido daños¹⁹.

¹⁸ A. H. N., Consejos, 1.081-5.

¹⁹ A. H. N., Consejos, 847-13.

Contra la línea seguida años atrás, el Gobierno, siguiendo orientaciones marcadas por el monarca, accedía a las peticiones de las municipalidades tendentes a prohibir las comedias, aunque lesionaran derechos adquiridos por las compañías. Esto fue lo que sucedió en Toledo. R. Castaño había formado una compañía para actuar en Castilla la Nueva, para lo que obtuvo título despachado en marzo de 1780 por D. José A. de Arjona, protector de los teatros. El Ayuntamiento de Toledo le negó, sin embargo, permiso para actuar, a pesar de que el síndico personero era favorable porque los ingresos del teatro formaban parte del caudal de Propios. Castaño acudió al Consejo, sin éxito. El acuerdo municipal de no admitir comedias fue ratificado por S. M. en 10 de abril de 1782²⁰.

En otras ciudades había división de opiniones, ya entre las autoridades civiles y eclesiásticas, ya en el seno de la corporación municipal. En Palencia el coliseo era propiedad de una cofradía hasta que, para cortar discordias surgidas sobre el uso de los palcos, el Ayuntamiento lo compró en 1783 por 25.000 reales²¹. Desde entonces, tenía interés en que hubiera funciones para amortizar el gasto realizado. El obispo había solicitado en varias ocasiones la prohibición, y su postura hallaba eco en varios munícipes. Como no se podían alegar razones morales, puesto que se había ido imponiendo un clima de austeridad para atenuar la persecución, en Palencia, como en otras ciudades, se acudió al argumento socioeconómico: la asistencia a las comedias causaba gastos, los trabajadores abandonaban sus labores, los jornaleros gastaban en la diversión sus cortos ingresos. Tales argumentos eran rebatidos por el síndico personero: «Esta ciudad se compone de comerciantes, fabricantes y artesanos, y número crecido de eclesiásticos; en ella comúnmente está acuartelado un regimiento, y es notorio que las gentes que concurren a las comedias son las de mayor posibilidad, y no los jornaleros y menestrales [...]. No advertimos qué males se siguen de la representación de comedias cuando sólo va a ellas el que quiere y puede, pues además de ser esto un acto voluntario no sólo está vigilando la justicia sino también los ministros y la tropa que concurren al patio, singularizándose los concurrentes en el silencio y compostura.» Por su parte, el procu-

²⁰ La cuestión rebrotó años más tarde, reinando ya Carlos IV. El Ayuntamiento estaba muy dividido en la cuestión de las comedias, y ello explica que en 1791-92 se tomaran acuerdos contradictorios. Vencieron, finalmente, los partidarios de la prohibición, y en 18 de febrero de 1793 el corregidor recibió orden real de no permitir las representaciones (A. H. N., 810-4).

²¹ En realidad fue el Consejo de Castilla quien mandó a la corporación que se hiciese cargo del coliseo para evitar ciertos conflictos de precedencia que habían surgido (A. H. N., Consejos, 1.248-1).

rador síndico insistía en que él no podía autorizar una diversión que reprobaba el obispo, y que si los Propios sufrían algún perjuicio, el común de los vecinos saldría ganando con la prohibición.

El corregidor (Baltasar Romero) al remitir estos informes añadía que él no veía ningún inconveniente en que continuaran las representaciones, y que sólo dos regidores y un procurador eran opuestos. En vista de ello, el fiscal del Consejo dictaminó que no había motivos para la prohibición (19 de noviembre de 1784). Lo que no nos dice el expediente, y tal vez pudiera averiguarse consultando la historiografía local, es si las representaciones continuaron después de la citada fecha.

Mucha semejanza en su desarrollo y desenlace tiene con el expediente de Palencia el promovido a instancias de los párrocos de León, dirigido al gobernador del Consejo en 22 de abril de 1785²². Hacían constar en ella que:

Componiéndose la población de dicha ciudad en su mayor parte de oficiales y jornaleros, sin muchos pobres, se está tratando por la Sociedad del País de formar Junta de Caridad [...], recoger los pobres, librándolos de la ociosidad, y hacer asistir puntualmente a sus trabajos a los oficiales, como lo recomendó Su Ilustrísima a la Sociedad, y como deben saber el corregidor y el Ayuntamiento, que sin embargo acaban de admitir comedias, como las admitieron el año pasado, que representaron sesenta días, poco más o menos.

Los párrocos, venerando las disposiciones de su Rey y las de sus sabios tribunales, y prescindiendo de las causas de la permisión de esta diversión en la Corte y otras poblaciones opulentas, aseguran a V. I. por la experiencia que tienen que las comedias en León es una diversión capaz de destruir todos los buenos oficios de la Sociedad, Junta de Caridad y otras qualesquiera personas que a más del Sr. obispo y curas trabajen a beneficio del estado general²³ de esta ciudad pobre, que lo será necesariamente con tres o quatro mil pesos que se gastan inútilmente en la diversión citada, porque los días de trabajar se van a la comedia los oficiales, pierden en esto y gastan en la entrada, y como la ocasión es tan poderosa, alegres a la salida de la diversión se siguen funciones, juegos y gastos, con que se hace más difícil de curar la repugnancia que tengan al trabajo e imposibilita el sustento e instrucción de la familia».

En cierto modo, los párrocos de León estaban utilizando argumentos de Rodríguez de Campomanes, enemigo jurado de las diversiones populares, y cuya campaña en favor del teatro nunca se había basado en procurar distracción a la masa trabajadora. Proseguía la exposición de los párrocos diciendo que la asistencia de los trabajadores a la

²² Id. *id.*, 1.227-11.

²³ El estado general o llano era el conjunto de los vecinos pecheros, tomado aquí como sinónimo de la clase más pobre de la población.

comedia en los días festivos, aunque no les impidiera acudir a su labor, no dejaba de tener inconvenientes. Y no vale, añadían, decir que si no van a la comedia irán a la taberna, pues no es así, «y quando sucediera, puede corregirse ejecutando lo ordenado contra los abusos, y los que en tiempo de oír el catecismo y divinos oficios se detengan en ellos». Alusión a lo dispuesto en las constituciones sinodales sobre prohibición de asistir a juegos y tabernas durante la misa dominical, so pena de ser multados por el «alguacil de vara» eclesiástico.

El fiscal del Consejo²⁴ pidió informes al Ayuntamiento y al corregidor. El primero declaró que durante varios años, y en cortas temporadas, se habían representado comedias, sin oposición de nadie, y menos de los eclesiásticos, que asistían a verlas en determinados palcos, aun no siendo las comedias tan arregladas y decentes como ahora. El año pasado (1784) hubo representaciones durante sesenta días y en éste sólo 55, a precios muy bajos: cinco cuartos, y los palcos a tres, dos y un real, «cuyo producto, rebajada la quota que han pagado a beneficio de los Propios, sólo puede haberles dado [a los cómicos] para comer». Por todo lo expuesto, estimaba infundadas las quejas de los párrocos y pedía que se autorizase la continuación de las funciones. El corregidor se limitó a transmitir este informe y manifestar su conformidad con el contenido del mismo. A la vista de lo informado, el fiscal dictaminó que no había motivos para prohibir las representaciones escénicas en León.

La falta de una política clara en cuanto a las actividades teatrales se revela en que, mientras se autorizaban en unas ciudades, se denegaban en otras. En 4 de enero de 1781 el confesor real transmitió al gobernador del Consejo una nota que decía: «El rey ha sabido que en la ciudad de Zamora se están representando comedias y quiere que V. E. despache una orden para que inmediatamente se suspendan y salgan de aquella ciudad los comediantes»²⁵. La causa de una decisión tan atropellada había sido una protesta del obispo. Años después, en 1785, el Ayuntamiento elevó instancia solicitando se reanudaran las representaciones, tanto para que se pudiera indemnizar el caudal de Propios de más de cuatro mil ducados que había gastado en el reintegro del patio de comedias, como por ser Zamora ciudad de numerosa vecindad, con oficinas públicas y guarnición militar, «y careciendo de toda pública diversión es fácil que la ociosidad sea instrumento para que muchos se

²⁴ Firma ilegible. No era Campomanes, que había pasado ya a desempeñar la presidencia del Consejo.

²⁵ A. H. N., 1.101-18.

entreguen a la más lamentable destrucción, pues habiendo recibido una compañía de cómicos el año 1781, a representación del obispo que era de esta ciudad exponiendo que estaba haciendo ejercicios espirituales se mandaron suspender y que saliesen de este obispado, desde cuyo tiempo no se han permitido...». A causa del abandono el teatro había sufrido daños que necesitarían 44.500 reales para su reparación. El corregidor informó favorablemente. También el fiscal, a vista de los datos de la Contaduría de Propios, se mostró favorable a la reparación del edificio, pero en cuanto a reanudar las representaciones el Consejo, a la vista de la real orden antes citada, no se atrevió a dar el permiso necesario.

La incoherencia de las disposiciones regias, el entrecruzamiento de influencias, las pretensiones del clero y las municipalidades a intervenir en todo lo referente al teatro, habían conducido a una situación plena de ambigüedad y de contradicciones, que se haría más patente al lector si incluyéramos en esta monografía el relato de lo que al mismo tiempo estaba sucediendo en Andalucía. Los espectáculos que se prohibían en una localidad se autorizaban en otra; los ayuntamientos cambiaban de parecer, solicitaban o rechazaban las comedias según la opinión cambiante de sus miembros o la impresión que en ellos hubieran dejado las prédicas de un misionero. El rey carecía de criterio propio en esta materia y no encontraba apoyo en el Consejo de Castilla, donde Campomanes había abandonado ya su guerra particular en pro del teatro. Sin embargo, en una ocasión por lo menos se intentó adoptar una norma general. Fue con ocasión de una petición del empresario teatral Francisco López, que había actuado en Córdoba (donde se habían restablecido las comedias), para trabajar en Sevilla, donde seguían prohibidas. El Consejo ordenó al fiscal reunir todos los antecedentes, suspendiendo entre tanto el permiso que pedía López, y recabar del rey una norma de carácter general (18 de abril de 1787). El rey ordenó al Consejo que le consultase sobre esta materia, oyendo primero a los presidentes de las chancillerías, los corregidores y los prelados, «de manera que se sepa el estado y vicios más frecuentes de los pueblos en que convengan las diversiones, número y aplicación, pobreza o abundancia de los habitantes y examen del [teatro] que sea más adaptable al genio de los naturales, y que favoreciendo la robustez [sic] sea menos expuesto al abuso y a la corrupción de las costumbres»²⁶.

²⁶ Esta consulta está al final del expediente citado en la nota precedente. Según Aguilar Piñal (obra citada, p. 164) la petición de Francisco López para representar en Sevilla tuvo lugar en 1783, pero la consulta de 1787 la refiere al año anterior, o sea, a 1786. Tal vez se trate de dos peticiones distintas.

La prevención de una encuesta tan vasta más parece medida encaminada a dar largas a un asunto enojoso que a facilitar su resolución. Si llegó a efectuarse, no tuvo efectos legislativos, pues no aparece tal ley en la Novísima Recopilación. Murió Carlos III dejando el teatro español en un estado caótico, y su sucesor, tan indiferente como él a las Bellas Letras, tampoco hizo nada por establecer una normativa de las representaciones teatrales que, aunque hubiera sido severa, hubiese terminado con el desorden reinante. Los hechos relatados en las anteriores páginas demuestran que había una apetencia de representaciones en las clases medias urbanas, en lo que podríamos llamar la burguesía culta; pero se trataba de un estamento reducido en número, mal definido desde el punto de vista ideológico, accesible a la influencia de los sectores más intransigentes del clero. Los *esprits forts* a la manera de Olavide eran muy raros, y esto es lo que explica las divisiones en el seno de las corporaciones municipales y sus frecuentes cambios de opinión.

Las catástrofes que señalaron el final del siglo XVIII favorecían a quienes incriminaban al teatro como diversión pecaminosa, susceptible de atraer la ira divina sobre las ciudades que la permitieran. Un capuchino, fray Bruno de Zaragoza, se atrevió a insultar a las numerosas víctimas del incendio del teatro de aquella ciudad, interpretado como castigo celeste por haber profanado la ciudad del Pilar con aquel espectáculo²⁷. «Yo mismo he visto, escribía años mas tarde Blanco White, a un fraile con un crucifijo en la mano pararse a la puerta de un teatro a la cabeza de una procesión nocturna y conjurar al pueblo a que no entrara en aquella mansión de pecado»²⁸. La Revolución Francesa, las guerras, el hambre y las epidemias que marcaron el comienzo del siglo XIX causaron una fuerte impresión, visible en episodios tan reveladores como la exposición del arrendatario del teatro de la Isla de León (San Fernando) que en 1800 renuncia porque «ha conocido que la diversión causa alguna ruina espiritual, no quiere lucro a costa de su conciencia, e indirectamente se considera causante de las ofensas que se puedan cometer contra ambas Majestades»²⁹.

Difícilmente se encontrará un testimonio más elocuente de la atmósfera moral que reinaba en España por aquellas fechas y del escaso fruto que había producido la campaña de los ilustrados en pro del teatro.

²⁷ *Representación del juicio a ocasión de haberse incendiado el teatro de las comedias en la ciudad de Zaragoza*. Sermón impreso en 1780, 55 páginas.

²⁸ *Cartas de España*, carta 4.^a

²⁹ A. H. N., Consejos, 1.305-16.